

**Consejo de Seguridad**

Distr. general
15 de mayo de 2002
Español
Original: francés

Carta de fecha 14 de mayo de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de la República Democrática del Congo ante las Naciones Unidas

Siguiendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de transmitir adjunta la carta de fecha 10 de mayo de 2002, dirigida al Sr. Adama Dieng, Secretario del Tribunal Internacional para Rwanda, por el Señor Léonard She Okitundu, con el fin de solicitar a las autoridades de dicho Tribunal que estudien la posibilidad de establecer una oficina del Tribunal en la República Democrática del Congo.

Le agradecería tuviera a bien hacer distribuir el texto de la presente carta y su anexo como documentos del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Ileka **Atok**
Representante Permanente
Embajador



**Anexo a la carta de fecha 14 de mayo de 2002, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante
Permanente de la República Democrática del Congo
ante las Naciones Unidas**

**Carta de fecha 10 de mayo de 2002, dirigida al Secretario
del Tribunal Internacional para Rwanda por el Ministro
de Relaciones Exteriores y Cooperación de la República
Democrática del Congo**

Con miras a afianzar la cooperación entre el Tribunal Internacional para Rwanda y la República Democrática del Congo, tengo el honor de invitar a las autoridades del Tribunal a que estudien la posibilidad de establecer una oficina de representación en la República Democrática del Congo, concretamente en la capital del país.

Durante su visita a Kinshasa, en febrero próximo pasado, usted señaló que algunos sospechosos o acusados buscados por el Fiscal del Tribunal circularían por los países de la subregión, en particular la República Democrática del Congo. En la misma ocasión, manifestó interés en una cooperación estrecha entre el Tribunal y el Gobierno de la República Democrática del Congo. Naturalmente, todas las autoridades congoleñas, incluido el Jefe de Estado y yo mismo, acordamos colaborar con la justicia internacional.

Recientemente, reiterando la posición del Gobierno de Rwanda, el Jefe de Estado Mayor y General Adjunto del Ejército Patriótico de Rwanda afirmó que los dirigentes de los *Interahamwe* y de las ex Fuerzas Armadas de Rwanda sospechosos o acusados de genocidio por el Tribunal, que ponen en peligro la seguridad de Rwanda, tienen su base en la misma Kinshasa. Dijo también que su ejército permanecería en el Congo mientras los sospechosos o acusados estuvieran en libertad. Es, pues, evidente que la detención de los presuntos genocidas y su enjuiciamiento por el Tribunal Penal Internacional conforme al artículo 1 de su Estatuto y al capítulo IX del Acuerdo de Lusaka, o por las jurisdicciones nacionales de Rwanda, el Congo u otros países, son más urgentes que nunca para el logro de la paz.

Esta iniciativa permitiría sin duda resolver los problemas de seguridad de Rwanda, favorecería la reconciliación nacional del país y, lógicamente, debería conducir al Ejército Patriótico de Rwanda a abandonar la República Democrática del Congo y finalmente, a la conciliación regional. Si las personas buscadas no se encontraran en el Congo, sólo una instancia internacional independiente como el Tribunal Penal Internacional podría confirmarlo en forma imparcial. En cualquiera de los dos casos, Rwanda no podría ya aducir razones de seguridad para mantener fuerzas en mi país.

Con copia a:

Sr. Kofi Annan
Secretario General de las Naciones Unidas

Sra. Navanethem Pillay
Presidenta del Tribunal

Sra. Carla del Ponte
Fiscal del Tribunal

Mantener una presencia en la República Democrática del Congo beneficiaría al Tribunal desde el punto de vista práctico, pues un servicio de investigación local de la Oficina del Fiscal o del Secretario del Tribunal permitirían una mayor proximidad geográfica con los sospechosos, los acusados y los eventuales testigos y brindarían la posibilidad de efectuar investigaciones sobre el terreno.

En el plano jurídico, el artículo 28 del Estatuto y el artículo 56 del Reglamento de Procedimiento y Prueba del Tribunal prevén este tipo de cooperación con el Estado. Además, la jurisdicción territorial y la jurisdicción personal del Tribunal justifica esa medida. Cabe, además, recordar que el Tribunal no sólo tiene oficinas en Arusha, sino también en La Haya, Kigali y Nueva York.

En cuanto al aspecto sociopolítico, la presencia del Tribunal en la República Democrática del Congo es necesaria para hacer justicia y luchar contra la impunidad. Al ayudar a castigar a los culpables, esta oficina local contribuiría también a la reconciliación entre las partes rwandesas y entre rwandeses y congoleños, pues permitiría aclarar una vez por todas la espinosa cuestión de la presencia de presuntos genocidas en el país. Renacería por fin la confianza entre los países vecinos y la región de los Grandes Lagos volvería a vivir en paz y seguridad. Estos ideales de justicia, reconciliación y paz son los principios rectores de la resolución 955 (1994) del Consejo de Seguridad, de 8 de noviembre de 1994, que contiene el Estatuto del Tribunal.

Esta propuesta es una nueva iniciativa del Gobierno de la República Democrática del Congo, que se inscribe en el mismo contexto que su propuesta de crear una comisión internacional de investigación sobre los grupos armados que actúan en el país, propuesta que lamentablemente no fue aceptada por el Consejo de Seguridad, quien prefirió confiar la tarea a la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC). Como es de público conocimiento, Rwanda sigue pretextando la existencia de grupos armados (*Interahamwe* o ex Fuerzas Armadas de Rwanda) para mantener su presencia militar en el Congo.

Nuestra propuesta de crear una oficina del Tribunal en la República Democrática del Congo demuestra el interés del Gobierno de mi país en aplicar el principio de justicia para las víctimas de las matanzas y el genocidio de Rwanda. Pone también de manifiesto su buena fe y su voluntad de transparencia en el proceso de desarme de los grupos armados. Además, tiene la ventaja de eliminar el pretexto de seguridad del Gobierno de Rwanda y, por consiguiente, toda justificación para el mantenimiento de las fuerzas de ocupación en el territorio de la República Democrática del Congo. El pueblo congoleño podrá recuperar así su soberanía y su integridad territorial. Por último, es una propuesta encaminada a establecer la paz en la República Democrática del Congo y en toda la región de los Grandes Lagos.

En la esperanza de que las autoridades del Tribunal aprovechen esta ocasión para fortalecer los lazos de cooperación, le reitero, Excelentísimo Señor, las seguridades de mi consideración más distinguida.

(Firmado) Léonard She Okitundu